

Honduras: crisis económica, elecciones y sistema político (1980-1990)

GUILLERMO MOLINA CHOCANO *

1. DEMOCRACIA Y SISTEMA POLÍTICO

SE HAN señalado como rasgos propios de la sociedad hondureña, tanto la capacidad del sistema institucional para absorber o por lo menos neutralizar los aspectos “más salvajes” de las contradicciones y tensiones sociales y políticas, como la aparición irregular e incompleta de intentos de democratización del país, no sólo en el plano formal-constitucional, sino en cuanto a una alteración o modificación relativa de las condiciones económicas y sociales prevalecientes.

Por otra parte, están las experiencias reformistas vividas en el país hacia finales de la década de 1950, durante la primera mitad de los años setenta y más recientemente, el retorno a regímenes constitucionales civiles (1982-1990)* después de casi una década de gobiernos militares. Estos tres momentos históricos marcan los parámetros de referencia de la evolución política reciente del país, y ofrecen el contexto para atender las posibilidades de un desarrollo democrático en Honduras.

En el primer caso un movimiento civil de carácter nacional reformista, encabezado por el gobierno liberal del presidente constitucional Villeda Morales (1957-1963), que logra institucionalizar mediante una legislación social avanzada las reivindicaciones y conquistas obreras y campesinas, originadas en la gran huelga de 1954, en plena etapa post-dictatorial cuando el ciclo histórico libera una serie de impulsos progresistas que se traducen en amplias luchas sociales, movilizaciones políticas y electorales, resistencia y protestas antidictatoriales, movimientos militares constitucionalistas, etcétera.

En el segundo caso, en el período posterior al conflicto hondureño-salvadoreño de 1969 y ante el fracaso del experimento de un gobierno de unidad nacional “a la colombiana” de los dos partidos históricos del país,

* Guillermo Molina Chocano: sociólogo hondureño. Profesor visitante de la Universidad Libre de Berlín (RFA). Actualmente profesor de la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social y secretario general del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (CEPROD).

¹ Tres administraciones consecutivas por elección popular: Suazo Córdova ((1982-1989) y Callejas Romero (1990-1993).

con el golpe de Estado de diciembre de 1972 se inaugura una nueva pero breve etapa de militarismo reformista que postula como su "quehacer fundamental" la realización de un avanzado proceso de reforma agraria que sitúa sus metas en la distribución de 600 000 hectáreas de tierra a un total de aproximadamente 120 000 familias campesinas en un plazo no mayor de cinco años.

Los objetivos de transformación se plasman en un Plan Nacional de Desarrollo relativamente ambicioso que introduce por primera vez en el país un estilo de planificación de corte "dirigista" e "intervencionista" y que tiende al fortalecimiento del Estado en su papel de gestor principal del desarrollo al asignarle una participación más activa y directa en la economía nacional. El Plan establece claras prioridades en la asignación de recursos que llevan a la ampliación de los aparatos del Estado, creándose nuevas instituciones de promoción y desarrollo, orientadas tanto a la implantación de medidas de política social como a estimular y apoyar la iniciativa empresarial privada.

La política de redistribución agraria se vio complementada con la llamada Reforma Forestal, que implicó la recuperación por parte del Estado de la inmensa riqueza maderera del país, cubierto en dos terceras partes por grandes extensiones de bosques, y puesta bajo la administración de una corporación estatal (CODEFOR), que surge desde sus inicios como una empresa estatal de alta responsabilidad capaz de captar un significativo volumen de divisas para el país mediante el control de la comercialización y exportación de la madera, proporcionando recursos adicionales de capital a las crónicamente débiles finanzas públicas.

A las medidas redistribucionistas, de corte nacionalista y de fortalecimiento del Estado, se unieron otras de carácter social (por ejemplo, el llamado decreto de "sindicalización obligatoria") que concitaron un importante grado de apoyo y consenso popular, que se tradujo en un nivel notable y poco usual de legitimidad política otorgado a un régimen *de facto*, no constitucional, pero que quizás por ello podía asumir en ese momento una postura social y políticamente avanzada en un contexto centroamericano adverso y encabezado por la dictadura somocista.

Por supuesto, la tradicional oposición oligárquica interna se hizo vivamente presente y se volvió cada vez más fuerte e intransigente hasta conseguir su propósito de bloquear el proceso reformista y su objetivo final de detenerlo completamente.

En efecto, el sector tradicionalmente terrateniente y ganadero y las compañías bananeras extranjeras que mantienen ociosas e improductivas grandes extensiones de las mejores tierras, reaccionaron acremente y opusieron una tenaz resistencia al proceso de reforma agraria, no obstante la flexibilidad y alcances limitados de la legislación dictada para tal propósito.

Los tres momentos históricos señalados presentan ciertas similitudes en cuanto que de alguna manera constituyen respuestas o salidas políticas a

crisis parciales del sistema o intentos de reconstrucción de la legitimidad política deteriorada por una insatisfacción generalizada del manejo de los recursos del poder público.

Como se vio, se trata tanto de procesos de retorno a un régimen constitucional-civil, en los casos de las elecciones de Villeda Morales y Suazo Córdova, como del caso contrario de López Arellano, donde la ruptura del orden jurídico-formal condujo a acciones de reformas que pretendían avanzar de otra forma en la democratización del país ante las exigencias de la movilización popular.

2. LA PARADOJA DE LOS AÑOS 80: APERTURA POLÍTICO-ELECTORAL CON MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

A diferencia de las experiencias anteriores, la década de los años ochenta ha transcurrido en un contexto de gradual agudización de la crisis económico-social y de los grandes desequilibrios macroeconómicos, en un escenario regional en el que se enfrentan y alternan espacios de guerra y conflicto bélico con arduos esfuerzos de concertación y negociación, los cuales, partiendo de Contadora en 1983, se concretan lentamente pero con cierta eficacia en los acuerdos de paz de Esquipulas II (Guatemala, 1987), Costa del Sol (El Salvador, 1989), Tela (Honduras, 1989), hasta la declaración de Antigua Guatemala (junio, 1990) donde se percibe que “el nuevo desafío no es la guerra sino la economía”.

Como se sabe, hasta los años setenta, Centroamérica y Honduras en particular, mantuvieron un significativo crecimiento económico con estabilidad de precios y tipo de cambio, obteniendo logros importantes en el campo económico y social como es el caso del mejoramiento de los sistemas de atención en salud y su respectiva cobertura, que se tradujeron en tasas de mortalidad decrecientes y disminución de algunos índices de morbilidad. No obstante y a pesar de loables esfuerzos gubernamentales, las transformaciones económicas y sociales alcanzadas han resultado insuficientes, en magnitud y naturaleza, para hacer frente a los ingentes problemas que afectan al país.

En tal sentido, el ritmo de crecimiento económico (cerca al 5%) que puede considerarse satisfactorio, ha resultado insuficiente en relación con el crecimiento de la población. Por un lado, dicho crecimiento ha sido muy inestable, reflejando los altibajos del mercado internacional y la extraordinaria dependencia del país con respecto a los países altamente industrializados; por el otro, el crecimiento económico y en general el proceso de modernización, han tendido a concentrarse en un limitado número de actividades formales, dejando rezagados del proceso de desarrollo a cerca de la mitad de la fuerza de trabajo incorporada en actividades de tipo tradicional en las áreas rurales y urbanas, donde se sitúa la mayor parte de la población campesina y la del sector informal urbano.

Esta crisis se ha agudizado a partir de 1980-1982, cuando se observa una clara y creciente contracción del nivel de actividad económica interna, en un contexto centroamericano muy delicado y explosivo, y en una coyuntura internacional muy compleja e incierta. La situación estructural y coyuntural arriba descrita, tiende a acentuar la situación de extrema pobreza predominante en Honduras y en consecuencia, a reducir las posibilidades de desarrollo, a no ser que se estructuren a corto y mediano plazo políticas y medidas alternativas que permitan un proceso de reactivación económica con amplios efectos sociales compensatorios ante la crisis y los respectivos procesos de ajuste. Estos últimos han implicado sucesivas devaluaciones y crecimiento de las tasas inflacionarias, especialmente drásticas a partir de la administración Callejas Romero.

Según los datos de CEPAL, la tasa de desempleo abierto se elevó aún más en el último año, alcanzando un nivel aproximado de 13%, en la medida en que la creación de empleo creció en un ritmo inferior al incremento demográfico. A su vez, los datos disponibles indican que el salario promedio anual ha descendido en forma ininterumpida a partir de 1984. Los sueldos y salarios no se han modificado sustancialmente, por lo que, con los aumentos de precios en proporciones promedio del 30% al 50%, el salario mínimo real se ha deteriorado en forma significativa en el último período, es decir que la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población consumidora se ha deteriorado.

No obstante estos acuciantes problemas, la lógica del sistema político se ha orientado hacia otros parámetros: los de la lucha por el poder en una incesante campaña electoral y de permanentes disputas entre el interior y los partidos políticos reconocidos, en un contexto en que se imponen primordialmente las variables geopolíticas y la "interiorización" de la crisis centroamericana.

En otras palabras, el panorama ha estado marcado por la interacción constante del juego de partidos políticos, el peso de las relaciones exteriores y la incidencia de la crisis regional, cuando se genera en el país el llamado fenómeno de la redemocratización o retorno a los regímenes civiles de democracia constitucional, en el contexto de la agudización de la crisis político-militar de Centroamérica y su correspondiente internacionalización. En este lapso, se han llevado a cabo cuatro importantes procesos electorales después de casi una década de presencia militar directa en la escena política: la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en abril de 1980 y tres elecciones presidenciales en noviembre de 1981, 1985 y 1989, respectivamente. Todo ello sin duda ha consolidado el sistema político-electoral en la última década, proporcionándole notable estabilidad y fluidez.

Estos procesos electorales posibilitaron el ascenso del Partido Liberal al gobierno de la república y la sucesión ininterumpida de dos presidentes civiles y constitucionales de esta afiliación ideológica en más de 50 años de vida republicana. Por otra parte y también dentro de este mismo

partido, por primera vez en la historia se efectuaron elecciones primarias internas bajo la reglamentación y supervisión del Tribunal Nacional de Elecciones, con la participación de siete candidatos aspirantes a la máxima dirección del partido (1987) y con cuatro corrientes internas (1988) para elegir candidatos a cargos de elección popular para los comicios presidenciales de noviembre de 1989, lo que supuso en ambos casos una movilización superior al medio millón de votantes liberales.

En 1990 ocurrió otro hecho asombroso: la transmisión pacífica del mando del partido de gobierno al triunfante Partido Nacional de oposición, acontecimiento que no se repetía desde 1933, cuando asumió el poder quien sería el famoso dictador Tiburcio Carias Andino (1933-1949).

No obstante estos avances en el plano de la participación electoral democrática del país, la situación contrasta con el intenso proceso de militarización a que fue sometida la sociedad hondureña por la aplicación de tesis provenientes de la "doctrina de seguridad nacional", el espectacular despliegue de la presencia militar norteamericana y de fuerzas irregulares extranjeras, dado el involucramiento de Honduras en el conflicto político-militar centroamericano. Esto ha tenido hondas repercusiones en el trastocamiento institucional de las relaciones de cooperación y conflicto entre sociedad civil y sociedad política, manifestado en múltiples contradicciones y tensiones sociales, como es el caso del inusitado incremento de la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, etcétera.

Como se sabe, esto implicó una subordinación casi completa de la política exterior hondureña a los lineamientos y concepciones de la administración norteamericana, que redujeron el problema centroamericano a sus dimensiones geopolíticas y por lo tanto sólo concebían una salida o solución de tipo militar. En términos de las consecuencias para el país esto significó la presencia de más de 50 000 refugiados (sin contar los no registrados), los estragos e impacto de la operación de fuerzas militares extranjeras, regulares e irregulares, con su secuela de daños en la propia población, económicos, ecológicos, etcétera, y el surgimiento del fenómeno de desplazados hondureños de sus tierras en las zonas fronterizas.

Todos estos elementos se conjugaron para profundizar la crisis, estructural y coyuntural, a nivel económico, social, político y cultural: aplicación de políticas de estabilización sin crecimiento que han agudizado los problemas de desempleo abierto; deterioro del aparato productivo y un alto costo social para la población; agravamiento de los niveles absolutos y relativos de pobreza crítica y de concentración de la riqueza; agudización de la crisis de representación político-partidaria y profundización de la dependencia de los Estados Unidos; surgimiento de una crisis de identidad cultural y de una mayor pérdida de soberanía nacional.

Estos aspectos decisivos tienden a configurar un cuadro definido de "crisis en la administración de la crisis", en la que juegan, por un lado, la "cohabitabilidad" entre un poder militar fortalecido por la asistencia

externa y regímenes civiles electos popularmente pero seriamente debilitados y restringidos en su capacidad de toma de decisiones frente a la crisis económica, la política exterior y las crecientes demandas sociales de la población organizada que se moviliza constantemente a través de los canales que provee un sistema constitucional-representativo. Por otra parte, resulta notoria la falta de capacidad de respuesta de la "clase política" ante la crisis y las múltiples exigencias populares, por la aparente ausencia de proyectos nacionales definidos que trasciendan el estrecho ámbito de las rivalidades partidistas inmediatas.

3. LOS AVATARES DE 1985: CRISIS Y MADURACIÓN DEMOCRÁTICA

Las elecciones presidenciales del 24 de noviembre de 1985 arrojaron un curioso resultado que muchos analistas calificaron de una "situación sin ganador", dado el balance de fuerzas derivado del evento y aludiendo a las expectativas frustradas de los principales contendientes que esperaban una mayoría aplastante a su favor. Por el contrario, se produjeron en el país precarias ventajas que obligaron por primera vez a un complicado sistema de alianzas en un régimen político hasta ahora simplemente bipartidista.

En efecto, sobre la base de ciertas reformas a la ley electoral que posibilitaron la postulación de varios candidatos presidenciales dentro de cada partido (al estilo de la "Ley de Lemas" uruguaya), José Azcona del Hoyo, político conservador de origen español, se convirtió en presidente electo gracias a la suma de los votos obtenidos por todos los candidatos del Partido Liberal (786 594, es decir, un poco más del 50%), el cual superó por tercera vez consecutiva en la década del 80 a su tradicional rival el Partido Nacional de Honduras. Sin embargo, individualmente y no por sumatoria partidaria, el mayor número de votos (656 882, cifra superior a la que logró el expresidente Suazo Córdova cuatro años atrás) lo obtuvo el candidato del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas.

De esa manera, paradójicamente, no alcanzó la presidencia de la república el candidato más votado en términos individuales que superó en más de 200 000 votos a su más cercano seguidor. Sin embargo, los pactos son los pactos. Según la célebre "Acta de Compromiso" y las reuniones celebradas en la Fuerza Aérea, las cuales pusieron fin a la llamada crisis institucional (primer semestre de 1985) precipitada por la Coordinadora de Oposición Democrática y Constitucionalista (CODECO), la proclamación del triunfador debía hacerse con base en el cómputo total de los votos por partido político y no por candidatos individuales.

No obstante la alta concurrencia de cerca de 1 600 000 electores y la participación del 84% de la población en edad de votar, los resultados finales no produjeron definiciones contundentes y sí dejaron muchas frus-

CUADRO 1

HONDURAS: RESULTADOS FINALES DE LAS ELECCIONES
CELEBRADAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1985

	<i>Votos</i>	<i>Votos %</i>	<i>Bancas</i>
Partido liberal	786 594	51%	67
Candidatos:			
1) José Azcona Hoyo	424 358	27.5	46
2) Óscar Mejía Arellano	250 519	16.3	18
3) Efraín Bú Girón	64 230	4.2	3
4) Carlos Roberto Reyna	43 373	2.8	0
5) Votos de Partido	4 114	0.3	—
Partido Nacional	701 406	45.5%	63
Candidatos:			
1) Rafael Leonardo Callejas	656 882	42.6	63
2) Fernando Lardizábal C.	22 153	1.4	0
3) Juan Pablo Urrutia	20 121	0.3	0
4) Votos de Partido	2 240	0.1	—
Democracia Cristiana	30 173	1.9	2
1) Hernán Corrales Padilla			
Innovación y unidad (PINU)	23 705	1.5	2
1) Enrique Aguilar Cerrato			
Total de votos válidos	1 541 878	100.0	
Total de votos nulos	27 733		
Total de votos blancos	28 230		
Total de votos emitidos	1 597 841		

FUENTE: Inforpress con base en datos del Tribunal Nacional de Elecciones.

traciones: Callejas no llegó a la presidencia y Azcona no tuvo la fuerza que esperaba y necesitaba para remontar la maltrecha herencia del anterior gobierno liberal del presidente Suazo Córdova. Las consecuencias de esto se reflejaron en la heterogénea y dispersa representación parlamentaria que se configuró con un bloque bastante sólido del Partido Nacional (63 diputados), una frágil alianza liberal Azcona-Alipo-Bú Girón (30, 16 y 3 diputados respectivamente), una agresiva bancada Suazo-Cordovista (18 diputados) y un pequeño contingente de los nuevos partidos DC y PINU (2 diputados cada uno), para un gran total de 134 congresistas, muchos de ellos reelectos y pertenecientes a la vieja casta de políticos tradicionales.

Esto creó la necesidad de inevitables alianzas intra e interpartidarias, orientadas, por supuesto, más por inmediatas ambiciones personales que por vitales intereses nacionales en medio de la aguda crisis regional. Simplemente no contaba el futuro del país en los siguientes cuatro años ni eran importantes los cambios sociales urgentes que los sectores populares reclamaban. Sólo interesaba ubicarse en una buena posición para obtener ventajas seguras en las nominaciones para candidaturas en la contienda presidencial de 1989.

Así, bajo la retórica de la unidad e integración nacionales y en medio de fuertes resistencias internas a cada bando, se concretó el famoso pacto entre "callejistas" y "azconistas" que sin duda vino a sellar la naturaleza y rumbo del nuevo gobierno, que básicamente seguiría los mismos pasos de su predecesor. Dicho arreglo político partidario, sin ningún contenido programático, era más bien una repartición de cargos públicos y posiciones de poder que recordaba el célebre y efímero "Pacto de Unidad Nacional" de 1970-71, el cual culminó con el golpe militar reformista de 1972. El acuerdo contempló la distribución de los cargos de la Junta Directiva del Congreso, magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, jueces de los diferentes tribunales del país, procuraduría, proveeduría, servicio exterior, entidades descentralizadas del Estado y hasta algunos ministerios. Sin duda, en este sentido, lo más importante fue la clara hegemonía concedida al Partido Nacional en el Tribunal Nacional de Elecciones, clave política para lo que sería su triunfo en el proceso electoral de 1989, amén de su peso en el control de la administración de justicia a nivel nacional.

El malestar en las bases no se hizo esperar, sobre todo en el electorado liberal que ingenuamente vio en Azcona una esperanza de cambio o por lo menos de rectificación de la política antipopular y antinacional del gobierno de Suazo Córdova, totalmente subordinado a los designios de la administración Reagan para América Central. Los comentaristas políticos cambiaron sus apreciaciones. Unos vieron en el pacto la confirmación de una especie de victoria pírrica que arrojó un gobierno sumamente débil sin mayoría parlamentaria y sin cuadros capaces para la conducción de la nave estatal.

En ese sentido y ya antes de asumir el gobierno, el movimiento azconista autorrestringió su poder directo en los organismos y niveles de toma de decisiones del sistema político; eran tantas las concesiones a sus adversarios que se desdibujaba definitivamente lo que había sido una victoria electoral del Partido Liberal, considerado en el pasado como la mayor y más progresista fuerza política del país.

Para otros, el pacto era la natural convergencia de dos corrientes afines que juntas obtuvieron alrededor del 66% de los votos y que compartían los mismos puntos de vista con una simple diferencia de personajes y colores políticos, lo que sólo expresaba una suerte de tendencias al conservadurismo de la vida política hondureña, la falta de oportunidades para las fuerzas que planteaban una alternativa de cambio democrático, o quizás se trataba únicamente de la lenta agonía de un modelo desgastado de poder político. No obstante, el rasgo más sobresaliente de las elecciones de 1985 fue, nuevamente, la participación masiva de la población que al votar preferentemente por los llamados candidatos disidentes o de oposición al interior de los dos grandes partidos tradicionales, Liberal y Nacional (juntos el 90% del total de votos), quiso expresar su rechazo, crítica o condena a la gestión del gobierno saliente, cuyas ejecutorias estuvieron plagadas de errores, arbitrariedades, atropellos a los derechos humanos, medidas económicas antipopulares, política exterior antinacional, intervención en las organizaciones populares de defensa gremial o sindical, violaciones a la Constitución e intentos de modificarla para propiciar el continuismo presidencial, toda suerte de escándalos de corrupción, pérdida de credibilidad y deterioro de la imagen internacional de Honduras.

Todo ello ayudó a explicar la amplia popularidad alcanzada por figuras como la de Callejas o Azcona los cuales, con el auxilio de un millonario financiamiento proveniente de los sectores más importantes del poder económico y con una campaña de propaganda técnicamente muy hábil, preparada por expertos internacionales, lograron forjar una imagen aparentemente progresista, de cambio, sin ofrecer realmente ninguna solución programática concreta que pudiera significar una mejoría sustancial en las dramáticas condiciones de vida de la mayoría del pueblo hondureño. Presentados como "Un nuevo amanecer" o "La gran esperanza nacional", concitaron sin duda la atracción del electorado, pero sin definir a fondo temas como reforma agraria, soberanía nacional, ataque al angustiante problema del desempleo o subempleo, medidas mínimas de solución a la creciente población marginal urbana, atención urgente al hambre y desnutrición infantil, diseño de una política exterior propia e independiente, etcétera.

En términos de geografía electoral, se mantuvo la tendencia por la cual el Partido Liberal triunfó en los departamentos de mayor grado de modernización y desarrollo relativo, donde se encuentra el mayor número de población organizada y expuesta a los medios de comunicación de ma-

sas. Es el caso del área agroindustrial más importante conformada por los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro que son, a su vez, los de mayor atracción migratoria hacia la costa norte del país y en donde se encuentran las principales concentraciones de obreros bananeros sindicalizados.

Por supuesto, el Partido Nacional mantuvo sus típicos baluartes en las zonas sur y occidental, especialmente en los departamentos de Copán, Intibucá y Lempira, con la excepción de La Paz, cuna del ex-presidente Suazo, que recibió una desproporcionada atención en obras y proyectos durante su mandato, lo que indudablemente influyó en el resultado por primera vez favorable al Partido Liberal. Sin embargo, por lo que toca a los centros urbanos más grandes, es interesante anotar que el Partido Nacional, o más propiamente el "callejismo", ganó en el área metropolitana de la capital Tegucigalpa donde centró una masiva campaña de proselitismo y de trabajo intenso en los barrios y colonias más populosos de la ciudad, lo cual le permitió capturar su gobierno municipal. Es aquí donde se encuentra el grueso de la burocracia pública y una buena parte del sector terciario de la economía nacional.

Por el contrario, el Partido Liberal resultó mayoritario en las ciudades de mayor dinamismo industrial y comercial y vinculadas a la actividad agroindustrial, forestal y portuaria de exportación-importación como es el caso de San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, La Lima, Olanchito, Puerto Cortés, Trujillo o Siguatopeque. Es en estas zonas donde se localiza la mayor proporción de población económicamente activa asalariada y donde tienen sus sedes las principales asociaciones campesinas de alcance nacional que agrupan a las organizaciones, empresas, cooperativas y asentamientos del llamado sector reformado del agro hondureño.

Además, se pudo comprobar como consecuencia importante del proceso electoral cierto cambio en la actitud ciudadana, lo cual ha desdibujado los agudos enfrentamientos y sobre todo la rígida separación bipartidista, causante anteriormente de las sangrientas y crónicas guerra civiles que produjeron tanta inestabilidad y atraso político para el país.

En esta campaña se observó mayor fluidez y tolerancia, incluso cierto acercamiento, entre los viejos bandos rivales dentro de un clima de coexistencia y mayor madurez política, quizás por la misma modernización y difusión de los mecanismos de comunicación colectivos y por la irrupción de las nuevas generaciones no comprometidas con las prácticas ancestrales de lealtad tradicional. Es más, el intercambio de lealtades y simpatías partidarias, contrariamente a las costumbres familiares, transcurrió en esta ocasión con toda naturalidad, a diferencia de los estereotipos del pasado que estigmatizaban a quienes cambiaran su preferencia partidaria. Esto tuvo un decisivo efecto positivo en el desarrollo de una visión pluralista de la política, la cual recibió su respaldo inicial al presentarse por primera vez en el país la posibilidad de elegir entre nueve candidatos a la presidencia de la república con sus respectivas planillas. El electorado

entendió y aplicó bien este sistema de elección nuevo aunque provisional en el marco de una campaña bastante civilizada de debates y discusiones públicas, por desgracia más proselitista que mínimamente programática.

Con todo, esto significó la consolidación de un sistema civil de sucesión pacífica del poder, que facilita una real y progresiva democratización en cuanto a igualdad creciente de oportunidades para las diferentes fuerzas políticas y la gradual apertura a nuevos mensajes de contenido doctrinario y a planteamientos programáticos, que formulen alternativas serias ante las graves urgencias nacionales.

4. MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y ELECCIONES INTERNAS

A diferencia de los comicios de 1985, en 1989 sí se produjeron definiciones contundentes en los resultados electorales, los cuales dieron al Partido Nacional y a su candidato Rafael Leonardo Callejas, una victoria absoluta superior al 50%. Es decir que se invirtió la tendencia que en el pasado otorgaba mayoría al Partido Liberal, pasando éste de 52.4% en 1981 a 43.1% en 1989.

A su vez, esta mayoría se reflejó en la integración del Congreso Nacional formado por 128 diputados y en las 289 alcaldías que configuran el poder municipal del país. En ambos niveles, el Partido Nacional obtuvo una ventaja significativa, que le proporciona una amplia y cómoda mayoría parlamentaria y la mayor parte de los gobiernos locales. Con ello se trastocaron las tendencias prevalecientes hasta 1985, en las que el Partido Liberal obtenía una importante superioridad en las principales ciudades del país y en gran parte de las zonas de mayor desarrollo capitalista. Una de estas sorpresas la constituyó la ciudad de San Pedro Sula, donde el Partido Nacional logró desplazar uno de los principales bastiones electorales tradicionales y del liberalismo de la Costa Norte.

En términos absolutos, el Partido Nacional alcanzó prácticamente el millón de votos, seguido por 776 983 votos liberales, lo que implica que absorbió a una buena parte de la nueva población votante, constituida por jóvenes que ingresaron al Registro Electoral en los últimos cuatro años. Sin embargo, vale la pena señalar que el índice de abstención se incrementó de un 16% en 1985 a un 24% en 1989.

No obstante, al parecer el sistema electoral ha mantenido su legitimidad e incluso se ha incrementado la participación electoral, especialmente de los estratos poblacionales más jóvenes que ya no se encuentran adscritos a las viejas lealtades partidarias y resultan más influidos por las imágenes y simpatías que transmiten y construyen los modernos medios de comunicación de masas, que ahora tienen a su disposición infinidad de técnicas propagandísticas y de mercadeo político.

En tal sentido, la campaña presidencial de 1989 tuvo como rasgo central el manejo de una alta tecnología de propaganda electoral, que vino

CUADRO 2

HONDURAS: RESULTADOS ELECTORALES 1980-1989

	1980	%	1981	%	1985	%	1989	%	Crecimiento acumulado 1980-1989
Inscritos:									
PL	495 779	49.6	636 653	52.4	786 603	49.2	776 983	43.1	281 204
PN	423 263	42.4	491 392	40.5	701 440	43.9	917 168	50.9	493 905
PINU	35 263	3.5	29 419	2.5	23 709	1.4	33 952	1.8	-1 311
DC			19 163	1.6	30 258	1.9	25 423	1.4	6 260
Blancos	19 847	1.9	17 430	1.5	28 115	1.8	18 483	1.0	
Nulos	24 221	2.4	17 326	1.5	27 616	1.8	27 107	1.5	
Total	998 522		1 214 923		1 597 801		1 799 126		

FUENTE: CEDOH, Julio Navarro, *Revista de Ciencias Sociales*, núm. 2, marzo de 1990.

a substituir, al menos parcialmente, los tradicionales métodos de agitación y movilización políticas, incluyendo el uso de helicópteros para el desplazamiento rápido de los candidatos hasta lugares muy remotos del territorio nacional, dando la impresión de una especie de omnipresencia.

El uso masivo de la televisión se convirtió en otro campo de batalla sumamente importante entre los contendientes; una verdadera guerra de *spots* a la usanza estadounidense, donde contaba menos el contenido del mensaje que su impacto audiovisual, la música utilizada y el frecuente tono de confrontación y de acusaciones mutuas entre partidos, que a fin de cuentas distraían la atención de los problemas centrales del debate y permitían evadir la cuestión medular de los programas de gobierno, particularmente la política económica, sin duda el tema más espinoso.

Al respecto, algunos analistas han hablado en sentido figurado de la "fujimorización" de Centroamérica, o quizá de América Latina, aludiendo a la construcción de candidaturas de oposición, las cuales, sin un programa específico canalizan el descontento popular, armados de un buen sistema de mecanismos de propaganda que logran edificar "alternativas" atractivas al gran electorado, quien expresa rechazo a las viejas formas de hacer política y a los esquemas de la clase política tradicional.

En ese mismo sentido, cabe hablar en Honduras de una modernización importante de los dos grandes partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional, que aún reúnen más del 90% de los votos, en un sistema persistentemente bipartidista. Aparentemente, en la última elección se trataba de un problema de alternabilidad en el poder después de casi una década de predominio liberal y ante las expectativas de que un cambio, cualquier tipo de cambio, sería más saludable que la mera continuidad en un contexto de crisis cada vez más aguda. Esto también alude al llamado fenómeno de la "desideologización", en el sentido de que la gente prefiere respuestas concretas a sus problemas de corto plazo antes que la discusión en torno a plataformas programáticas más elaboradas y con algún sentido de propuesta política doctrinaria.

Aunque coincidían en varios aspectos, la modernización de los partidos políticos tuvo sus diferencias. Mientras el Partido Liberal ponía el acento en la democratización interna de sus niveles de mando, con dos elecciones consecutivas, 1987 y 1988, para elegir en forma amplia y abierta a los cuadros directivos y a los candidatos a puestos de elección popular, el Partido Nacional se dedicó más a tecnificar y remozar su sistema de información, realizando censos de militantes y simpatizantes, reorganizando los Comités nacionales, locales, departamentales y centrales, entrenamiento y acceso a los Censos Electorales Nacionales, a través de un hábil manejo de los organismos respectivos tales como el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Nacional de Elecciones.

Por otra parte, en ambos partidos surgió un nuevo liderazgo político-empresarial de corte urbano-industrial, que desplazó a buena parte del

viejo caudillismo partidista, rezagado de las corrientes modernas de la política, sectario, poco tolerante y dispuesto a la negociación y el regateo de lo que pareciera ser “una nueva forma de hacer política”. En este sentido sobresale la edad media (entre 40 y 50 años) de las figuras más relevantes que pasan a ocupar los principales puestos de dirección en las estructuras partidarias. Algunos analistas han planteado que esto representaría el surgimiento de una “nueva derecha” en Centroamérica: más moderna, tolerante, gerencial y sobre todo pragmática en su desenvolvimiento dentro de los nuevos escenarios que se van perfilando en el marco regional e internacional, lo cual calzaría perfectamente con las nuevas formas de inserción en el mercado mundial; la liberalización y la aplicación de los nuevos enfoques neoliberales del ajuste económico; las nuevas modalidades de integración a escala regional; el tratamiento del medio ambiente y el diseño de programas de compensación social, etcétera.

En este marco general, la derrota del Partido Liberal ha sido interpretada, igual que en otros casos de América Latina, como una suerte de “voto castigo” del electorado ante una administración de 8 años consecutivos que no supo manejar o por lo menos controlar los principales parámetros de la crisis económica y social. Además, influyó el proceso de militarización a que fue sometida la sociedad hondureña al involucrarse directa y abiertamente en el conflicto político-militar de Centroamérica, bajo las presiones de la administración Reagan que convirtieron a Honduras en un campo de despliegue de las tropas militares estadounidenses y de operación de las fuerzas antisandinistas más conocidas como *contras*.

El efecto de esta presencia se manifestó en daños económicos y sociales a la población; incremento en los actos de violencia y delincuencia; tráfico de drogas y de armas; destrucción del medio ambiente; movimientos de población hondureña y productores cafetaleros; presencia masiva de refugiados y de población migrante indocumentada que desplazó buena parte de mano de obra hondureña.

Existen muchos otros factores que incidieron en los resultados electorales, además del natural desgaste político del partido gobernante y la capitalización de sus errores por parte del partido opositor, aunque ambos compartieran responsabilidades en buena parte de la gestión gubernamental y de las principales decisiones políticas de la última década. Pero sin duda, la mejor organización y tecnificación del Partido Nacional fue un factor determinante en su triunfo electoral, habida cuenta del debilitamiento del Partido Liberal y de las simpatías recibidas de importantes protagonistas tanto externos a la región como dentro de la misma.

Un breve balance general nos indica cierto avance en la consolidación de la democracia político-electoral en Honduras en esta última década. Sin embargo quedan pendientes problemas cruciales de la agenda societal.